

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE CARACTER ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL DE PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL

La democracia tiene como fundamento la honra y dignidad del ser humano e impulsa su desarrollo más allá que cualquier otra forma de gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, obliga necesariamente al Estado a evitar la intromisión ilegal en la vida privada de las personas. Promueve el desarrollo cívico del ser humano al reconocerle su capacidad de participar en el gobierno, involucrándose en la vida pública, en la toma de decisiones con base en el libre flujo de información, en la discusión abierta para promocionar el bien público con apego a los valores democráticos, y que son: el respeto a la dignidad humana, el apego a la legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.

Se debe promover el avance de la cultura democrática de los mexicanos a través de todos los medios posibles. Ello requiere hacer explícito su fundamento: la igualdad de dignidad, derechos y deberes de todas las personas, así como el reconocimiento de los mismos a las generaciones del futuro.

La sociedad a la que aspiramos es la sociedad tolerante, democrática y pluralista. Una democracia que persista en su voluntad de promover la equidad, la fraternidad, y la libertad. Somos partidarios de la cooperación social, estamos convencidos que, el orden social se construye mejor en el sentido de responsabilidad de los ciudadanos y en su buena disposición para obrar sin el temor a las sanciones. Los ciudadanos organizados, ingresamos para cumplir con nuestro deber democrático y hemos comprendido que no puede haber democracia donde no haya un pueblo dispuesto a ejercer el poder.

Nos proponemos dignificar a la política no haciendo política a nombre del pueblo, sino con y junto a él, nos esforzaremos porque el pueblo se enamore de México y recupere su confianza en sí mismo y participe activamente en el destino de nuestra Nación, sienta la Constitución como suya y el gobierno como algo propio.

Los ciudadanos organizados aspiramos al gobierno democrático, gobierno por la mayoría y tolerancia ante el disenso, libertad de pensamiento, palabra, prensa e igualdad de todos ante la Ley. Sin embargo ni divinizamos a la mayoría ni la consideramos infalible; no suponemos que constituya de por sí, prueba de la bondad de una política, en orden al bien común, el que los más la apoyen. Nunca recomendaremos la dictadura de la mayoría ni la opresión violenta de la minoría. Aspiramos a estructurar un sistema político que permita la pacífica colaboración y fomenta la progresiva ampliación e intensificación de las relaciones sociales. Pero además de lo anterior, la democracia es la posibilidad de cambiar de gobierno de manera civilizada, a través del voto, y esta es la gran ventaja, pero sin agotarse en ella. La democracia así vista, es la posibilidad que tienen los electores para

ratificar a los buenos gobiernos y deponer a los malos.

La democracia, como la entendemos, es un régimen político donde todos, gobernantes, legisladores, magistrados, partidos políticos, empresarios, trabajadores del campo y la ciudad en general, se comprometen a convivir pacíficamente, respetando cada uno la esfera de libertad del otro y subordinando esa libertad a valores humanos y sociales absolutos e intocables. La democracia es un sistema de derechos de participación política. Ella hace posible que los ciudadanos ejerzan influencia en las decisiones políticas, pero la democracia no constituye aún una garantía para el desenvolvimiento de una sociedad contractual y una democracia consensual. Por lo tanto, ella sólo realiza el valor básico de la participación, e incluso sólo en el ámbito político. Las mayorías corren el riesgo de tratar a las minorías de las formas más autoritarias, con intolerancia, sin el debido respeto al derecho de autodeterminación.

Somos partidarios de la democracia participativa, es decir, que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que decida, también, en buena medida, por sí mismo. Creemos en completar la democracia representativa con formas de democracia participativa, tales como iniciativas legislativas populares, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas independientes, plebiscito, referéndum y aceptación de iniciativas ciudadanas de todo tipo. Estos elementos de democracia participativa preservan a las mayorías de caer en la tentación de silenciar a las minorías y quitarles su libertad de acción: son mecanismos que permitirán profundizar los niveles democráticos, que renovarán la vida política del país y que reducirán el poder de las elites políticas.

Como premisa fundamental se encuentra la consolidación, fortalecimiento y desarrollo del Estado Soberano, constitucional y democrático, que tiene como principio constitutivo la soberanía popular, cuyo fundamento se encuentra en la existencia de un régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y en general a la sociedad organizada, éticos en cuanto a la probidad en la imparcialidad de sus decisiones y apoyos favoreciendo la justicia y apegándose a las obligaciones constitucionales, señalándose por sus prácticas eminentemente democráticas a fin de contribuir a la educación y formación de un ciudadano demócrata e interesado en el quehacer político, un ciudadano que conciba y aplique la política de manera tolerante y racional, a fin de originar una ciudadanía capaz de integrar, negociar y concertar soluciones veraces con el consenso de la mayoría y aceptables para el tejido social, ubicar en tiempo y forma las controversias producto del conflicto, inseparable a toda vida en sociedad, y hacer que se cumplan los acuerdos tomados en beneficio del pueblo.

Fomentaremos la soberanía nacional y bajo ningún concepto aceptará pacto o acuerdo alguno que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos extranjeros, no aceptamos

financiamiento prohibido por el código federal de instituciones y procedimientos electorales ni aceptamos subordinación alguna de tipo religioso. La sociedad civil debe participar y ejercer con responsabilidad el derecho a la información y la transparencia, para avanzar en la calidad ética de la relación entre entidades gubernamentales, ciudadanos y sus organizaciones, en tanto que el gobierno debe abrir sus procesos de decisión y acción a la ciudadanía. Se han dado pasos positivos y valiosos en esta materia, que requieren ser consolidados.

México es una nación con historia, dignidad y futuro. Ni el comercio ni la globalización de las comunicaciones pueden substituir la decisión política que da sustento a nuestra comunidad nacional. Después de veinte años de prevalencia de la agenda económica de la economía global sobre el proyecto de nación, es el momento de subordinar la dinámica económica al proyecto ético-político del país. Sin proyecto productivo propio, en la era de la economía global, la nación no puede realizar sus objetivos sociales, culturales y políticos.

La política de desarrollo económico debe ser integral y promover la creación de riqueza y su distribución de manera equitativa entre la población, los factores y sectores de la producción y las regiones del país. En los últimos veinte años se ha aceptado acríticamente la agenda impuesta del Consenso de Washington, que no tiene como objetivo el desarrollo económico. Se ha adoptado una postura pasiva ante los mercados y se ha reducido de manera irracional el tamaño, capacidades y responsabilidades del estado para la promoción de la justicia y el desarrollo económico. La política monetaria ha conducido la política salarial, resultando en una tendencia constante a la reducción del poder adquisitivo del salario y por tanto del mercado interno. Es indispensable la modificación de la economía política, para tener una verdadera política de desarrollo económico, que permita altas tasas de crecimiento con control de la inflación.

La competitividad nacional no se ha establecido aún como el referente de la política económica. Sin dejar de considerar la moderación de la inflación como objetivo de extraordinaria importancia, se requiere alcanzarlo mediante el aumento de la producción y la productividad y no sólo mediante la política monetaria recesiva, a través del denominado "corto".

La prioridad de México debe ser el crecimiento económico, el apoyo a las empresas nacionales, el mercado interno y el empleo, sin descuidar los mercados globales. Ello es imposible sin un método de trabajo coordinado entre empresarios, sindicatos, gobierno y el sector conocimiento. Las formas institucionales del pasado no se han actualizado para estos propósitos, en función de objetivos estratégicos que se deben alcanzar en cada una de las cadenas productivas.

El sistema de planeación democrática plasmado en la Constitución refleja aún el

centralismo presidencialista. Éste requiere ser reformado y establecer mecanismos y procesos para la conceptualización, diseño, consenso, determinación por derecho positivo, ejecución, evaluación política y modificación de políticas de estado, con la participación de las fuerzas políticas y organizaciones productivas y sociales. Por ello se debe promover la conformación de dicho Consejo y hacer compatible la planeación nacional y la que conducen las entidades federativas.

No se ha avanzado en el compromiso del Poder Ejecutivo de construir, con la participación de la sociedad organizada, una visión del desarrollo nacional a largo plazo, que se ha definido como 25 años. Se requiere actuar con celeridad, pues es indispensable la reflexión y propuesta de un desarrollo para el siglo XXI, capaz de dar una adecuada perspectiva a las decisiones presentes.

La mayor parte de los programas sectoriales 2001-2006 tienen que ver con el desarrollo económico: Programa Nacional de Financiamiento 2001-2006; de Desarrollo Empresarial; de Política Laboral; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Programa Sectorial Agrario; Programa Especial de Ciencia y Tecnología; de Comunicaciones y Transportes; de Turismo; de Vivienda; de Mejora Regulatoria; de Comercio Exterior y Promoción a la Inversión. Cabe señalar que a pesar de la demanda explícita de los industriales; a la fecha no se tiene un programa sectorial de política industrial.

Los programas sectoriales representan esfuerzos para dar contenido y visión a las acciones gubernamentales. Su enfoque metodológico es diverso y no se ha establecido la sinergia entre los mismos. Sin embargo, alcanzar los objetivos que plantean, sólo será posible si se deciden y llevan a cabo las modificaciones propuestas de la economía política. El método de planeación es cuestión sustantiva y no meramente de operación.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y de las entidades federativas, pueden quedar en referentes sin eficacia para transformar la realidad, en tanto no se modifique la actual economía política. El límite para su realización lo establece la raquítica fuerza presupuestal, que se convierte en el verdadero techo de lo posible.

La inercia de gobernar sobre la sociedad y no con la sociedad aún prevalece en múltiples espacios burocráticos. Se requiere que el gobierno lleve a cabo sus responsabilidades, mediante un trabajo más cercano y corresponsable con las organizaciones de trabajadores, empresarios y especialistas para hacer las modificaciones que requiere el modelo de desarrollo. Sin éstas, la economía no avanzará de acuerdo a las estimaciones gubernamentales, por el efecto conjunto de los limitantes estructurales mencionados.

Se debe establecer una política de estado que incorpore: desarrollo industrial, desarrollo de programación en español y de sitios en el ciberespacio en nuestro idioma, formación de especialistas, estrategias de desarrollo de infraestructura, acuerdo con los operadores, desarrollo institucional de los municipios para la difusión de la red en pequeñas comunidades, desarrollo de la cibercultura en las empresas, financiamiento de equipos para su acelerada difusión entre la población de menores ingresos y estudios sistemáticos sobre el cambio cultural. El programa e-México debe avanzar a una visión integral.

México es un país con importante potencial energético y debe desarrollar todas las fuentes de energía de hidrocarburos, petróleo, electricidad, en todas sus fuentes hidro, gas, nuclear, solar, geotermia e hidrógeno. La cuestión central es considerar al sector energético como palanca del desarrollo productivo, industrial y tecnológico de la nación. Por ello es inadecuado como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, avanzar hacia una Alianza Energética de América del Norte, pues en las actuales condiciones no tiene otro significado que ofrecer recursos naturales sin valor agregado. Tomar acuerdos de esta naturaleza sin proyecto nacional acordado y decidido con la participación de la sociedad mexicana, conduciría a riesgos innecesarios para el país.

En virtud de lo anterior, se debe mantener la actual definición constitucional de sectores estratégicos, bajo control exclusivo del estado, lo que se refiere a la explotación de los hidrocarburos, así como la propiedad sobre las redes de transmisión de energía eléctrica. México no debe hacer modificaciones constitucionales para hacer las inversiones que se requieren en esta materia, sino modificar el régimen fiscal de las empresas paraestatales, para dotarlas de capacidades crecientes de inversión y aumentar su autonomía de gestión. En este marco, se deberá planear conjuntamente con el sector privado, el desarrollo del sector, para cubrir de manera creciente las demandas del sector paraestatal, con la oferta de bienes, tecnologías, consultoría, ingeniería y servicios ofertados por empresas nacionales.

PROGRAMA PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL

Es tiempo de superar el concepto neoliberal de "combatir" la pobreza, pues esta idea bélica supone una agresión que debe ser suprimida por medios violentos. Este es un concepto vacío de contenido positivo: la agenda del futuro es el desarrollo de todas y cada una de las personas y comunidades. Se debe formular el problema en términos positivos y establecer con criterios éticos, el establecimiento de condiciones para el desarrollo de toda persona, con una clara definición de responsabilidades, derechos y deberes, para personas, comunidades e instituciones públicas. Se requiere orientar el esfuerzo hacia la generación de desarrollo humano y riqueza material y no sólo superar la condición de pobreza. El desarrollo humano debe ser el objetivo a alcanzar para todas y cada una de las

personas. Realizar este imperativo ético requiere la modificación de la actual economía política y ofrecer verdaderas oportunidades de desarrollo económico y de empleo para las actuales y futuras generaciones de mexicanos. Perpetuar el actual modelo económico sin modificación alguna, muy probablemente sólo dará continuidad a las tendencias al aumento de la pobreza.

La política social debe estructurarse alrededor de las necesidades resultantes del cambio demográfico, y establecer políticas para anticiparlas y crear las condiciones más favorables a su satisfacción. Existen previsiones sobre la probable evolución de la población hasta el 2050, que constituyen un referente sobre lo que se requiere hacer a futuro. Esto debe ser el eje de las definiciones estratégicas de la política social.

La política de desarrollo social debe considerar de manera integral a las instituciones de seguridad social, cuya viabilidad financiera requiere ser asegurada. En estas instituciones se tiene tal vez una de las explicaciones de la estabilidad política y paz social del país en el último medio siglo, pues a través del IMSS y el ISSSTE, se ofrecen servicios médicos y seguridad social para 70 millones de mexicanos, así como la atención de 700 mil partos y 2.5 millones de operaciones cada año. Estas instituciones deben ser fortalecidas a futuro, como lo ha comprometido el Ejecutivo Federal.

Somos mexicanos, hombres y mujeres del campo, de las clases populares e indígenas conscientes de que a pesar de la grave situación de desesperanza y desastre económico, político y social en que se debate el campo mexicano y la sociedad en general, hemos valorado serenamente diferentes vías y propuestas de acortamiento del camino que recorten nuestras comunidades y pueblos, hemos valorado objetivos, medios y resultados de la aplicación práctica de diferentes paradigmas políticos, pero sobre todo hemos valorado las señales que nuestro pueblo nos envía y que se expresa en urnas; la creación de escenarios transformadores, de nuestra realidad económica, política y social por métodos democráticos, demanda de millones de mexicanos. Y la advertencia de que sin modificar las condiciones de miseria e injusticia que impulsa a luchadores sociales a adoptar la violencia armada como forma de lograr justicia social, democracia y desarrollo sustentable, surgirán una y otra vez los brotes insurreccionales. Nos imponemos el deber de convencer a la sociedad y al gobierno de convertir futuros escenarios de guerra en escenarios transformadores, de discusión, debate y propuesta; privilegiaremos el diálogo y la reflexión y optaremos por el camino democrático y sus formas para recuperar soberanía popular e incidir en el rumbo del país.

Favorecemos una política social que empareje las condiciones de vida distintas, cuyo objetivo sea socorrer a los ciudadanos y grupos sociales desfavorecidos y capacitarlos para que puedan afrontar con dignidad y autonomía los azares de la

existencia. Su objetivo no es organizar sistemas de asistencia vitalicia, sino esforzarse por secundar a las personas y grupos sociales de forma tal que puedan prescindir lo más pronto posible del auxilio social. La política social que proponemos invoca la dignidad del hombre y cree en la fuerza de su personalidad. Por eso atribuye al individuo y al grupo social desfavorecido un mayor poder de auto curación. La activación de la ayuda propia como respuesta a la promoción y él estímulo confirma su concepción. Una vez que sé ha alcanzado la meta; esto es, la activación de la autoayuda, la asistencia se hace superflua. También las instituciones sociales se entienden como temporales. El Estado debe asumir deberes asistenciales donde sea preciso y durante el tiempo que sea necesario, pero debe suprimir las prestaciones cuando estas sean prescindibles, y afectar los fondos liberados al alivio de las necesidades reales que hayan surgido en otros campos.

Un futuro social promisorio requiere un trabajo conjunto, que complemente salario suficiente, salud y educación básica, requiere enfatizar la formación ciudadana, los valores cívicos y el respeto a la ley. Si no hay economía de crecimiento, difícilmente se aspirara a asignar el 8% del PIB mínima necesaria para resolver los problemas educativos del país. La educación pública necesita aumentar el gasto por estudiante, mismo que ha disminuido consideradamente los anteriores diez años. Se estima que ha decrecido creando menos de la mitad del que se asignaría en 1993.

La educación pública, logro disminuir las posiciones de oficio en México, se reconoce, con todo el avance en la materia. Esta educación sin embargo, no solo debe ser vínculo para la movilidad social, sería también generadora de ciencia y tecnología. La educación media y superior pueden ser detonadores de procesos productivos importante, por lo que ella debe vincularse con una política de desarrollo económico con dependencia y soberanía de otorgar riqueza para todos, equidad y justicia social.

Sociedad y gobierno, se deben comprometer en la construcción de una educación básica de calidad que desarrolle las facultades de las personas, que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los seres humanos en sus personas y social. Este tipo de educación requiere también de acuerdos y aulas en buenas condiciones, materiales, con el equipamiento necesario para el desempeño de novedosas prácticas educativas, especialmente se necesitan verdaderas unidades educativas.

Es necesario que los recursos económicos humanos y materiales, lleguen a todos los negocios, para abatir los rezagos en aquellas localidades alejadas y dispersas o en muchas de las zonas urbanas marginadas de la gran mayoría de las ciudades más pobladas.

Las cifras estadísticas actualizadas y la evaluación que la Organización de las Naciones Unidas hacen referentes a los niveles de vida de la población de México, el analfabetismo, la pobreza extrema de las comunidades indígenas y regiones marginadas, la insalubridad, la desnutrición, el desempleo, el déficit en vivienda y servicios, el monto de la deuda interna y deuda externa, el monto de la inversión extranjera, la importación de alimentos, la exportación de materias primas principalmente petróleo crudo, el retraso y la dependencia tecnológica, la emigración de la juventud y de la población económicamente activa, la inseguridad pública, el abstencionismo electoral, la impunidad, la represión, el narcotráfico, el surgimiento de grupos armados paramilitares y guerrilleros. etc., nos conduce a la conclusión inequívoca de que efectivamente nuestro país está en crisis económica, política, social y ambiental, y que ha perdido parte importante de su soberanía nacional. Que ésta solo puede reconstruirse con la participación patriótica, consciente y decidida de la mayoría de sus ciudadanos, para realizar profundos cambios en la base misma de la sociedad y en la estructura del estado para corregir el rumbo de la Nación.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad social para efecto de dar cumplimiento a nuestros postulados de índole político, económico y social nos proponemos organizar a nuestros afiliados hombres y mujeres para que ejerzan las prerrogativas y obligaciones ciudadanas en los términos que estipulan los artículos de la Constitución General de la República.

Para ello afiliaremos a los ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad de manera voluntaria y pacífica directamente en sus centros de estudio, trabajo o de vida y sembraremos nuestra estructura organizativa conforme a lo señalado en nuestros estatutos que rigen nuestra vida interna.

En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de Parlamento.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS NACIONALES

Parlamento se propone las modificaciones necesarias para enriquecer y fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin de incorporar figuras como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la aceptación de iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes, de tal forma que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que también ejerza de manera directa el rumbo de su gobierno.

Para Parlamento la democracia no sólo es una abstracción ni se reduce a la

participación electoral, sino que se traduce en un conjunto de derechos de los ciudadanos que les permitan vivir en paz y armonía y que les permitan fortalecer su condición soberana, para traducirlos en acciones de gobierno. Tales derechos son la alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y la salud y fortalecen la vida democrática.

Parlamento propone crear una nueva política y un nuevo trato del estado mexicano hacia a los ciudadanos de la república.

=>Es necesario crear las condiciones económicas, políticas y sociales que estructuren un verdadero cambio, a favor de los trabajadores del país.

=>Por la revisión y modificación al artículo 27 constitucional que disminuya el límite de la pequeña propiedad agrícola y ganadera, que prohíba la propiedad de la tierra a las sociedades anónimas por acciones que encubren latifundios, que proteja la tierra ejidal como patrimonio familiar y sea en los hechos imprescriptible, inalienable e inembargable

=>Por la reglamentación de la fracción xx del artículo 27 constitucional mediante la promulgación de la ley de desarrollo rural integral

=>Por la promulgación de una ley de amnistía para todos los campesinos e indígenas y luchadores sociales presos o perseguidos por defender sus legítimos derechos de la tierra y las causas sociales.

=>Por el reconocimiento a las organizaciones campesinas, indígenas y sociales en sus distintas formas, como entidades de interés público, y como interlocutores válidos de los intereses de la sociedad rural frente al estado

=>Por la entrega inmediata a los campesinos de los predios donde existen concesiones ganaderas vencidas, o concesiones de la comisión nacional del agua entregada a particulares y prestanombres.

=>Por la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas en las que desde hace 9 años no existe actuación de la autoridad agraria

=>Por que se instituya el Programa de Organización y Fomento como una política institucional

=>Que se creen los Fondos para el Desarrollo Agrario y Fondos para la creación y consolidación de la micro industria como un instrumento al alcance de la mano de los campesinos y de los pequeños y medianos empresarios del país

=>Que exista un reconocimiento constitucional del derecho a la tierra como un

derecho al trabajo de los campesinos sin tierra y del fomento a las actividades productivas en todas sus ramas y que se creen instrumentos para lograrlo

=>Que se instrumente un Programa de Regularización de Tierras, sobre aquellas que poseen campesinos en calidad de poseesionarios en propiedad privada o ejidal así como un programa de Fomento y Financiamiento a todas la actividades productivas del país

ESTATUTOS

DE LA DENOMINACION

ARTICULO 1

La Asociación se denominará "**parlamento ciudadano nacional**", La Asociación es una Organización Política Nacional de ciudadanos mexicanos, con la disposición de participar de manera pacífica y por la vía democrática en la vida política del país.

DEL OBJETO

ARTÍCULO 2

La asociación se constituye con el objeto siguiente:

- I.- Participar pacíficamente en la vida política del país.
- II.- Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como contribuir a la creación de una opinión pública mejor informada.
- III.- Solicitar registro ante el Instituto Federal Electoral como Agrupación Política Nacional.
- IV.- Realizar actividades editoriales, de educación y capacitación política, realizar investigación económica, política y social.

ARTICULO 3

El lema de la asociación es "**por una ciudadanía informada**".

El emblema de la Asociación es un triangulo en tres colores negro, rojo y azul. Las siglas son: **PCN**. Los colores que la asociación usará son el rojo, el negro y el azul.

DEL DOMICILIO

ARTICULO 4

El domicilio de la Asociación estará en la ciudad de México, D.F., sin perjuicio de establecer delegaciones, comités o representaciones en cualquier otro lugar del país.

DE LA NACIONALIDAD

ARTICULO 5

La nacionalidad de la Asociación es mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación alguna en la Asociación y ésta no admitirá como asociados a personas de nacionalidad distinta de la mexicana. Nos obligamos a no aceptar pacto o acuerdo en cualesquier forma que nos sujete o subordine a cualquier extranjero, organización internacional o partido político extranjero. Así mismo no aceptamos o pedimos apoyo de cualquier tipo proveniente de ministros de los cultos religiosos o de sectas, o de organizaciones religiosas e iglesias, o de cualquiera de las personas e instituciones que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe como proveedores de financiamiento.

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 6

El patrimonio de la sociedad se integrará:

- I.- Con las aportaciones voluntarias, ordinarias o extraordinarias, de los afiliados o simpatizantes
- II.- Con los rendimientos financieros.
- III.- Con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran.
- IV.- Con los recursos y financiamiento público de acuerdo con la ley en la materia.
- V.- Con los ingresos provenientes de sorteos, bailes, y demás actividades lícitas y permitidas que realice la Asociación.

ARTICULO 7

El patrimonio de la Asociación se destinará exclusivamente al cumplimiento del objeto social, por lo que no podrá ser aplicado para otros fines.

DE LA DURACIÓN

ARTICULO 8

La duración de la asociación será de 99 años

DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO 9

Son asociados las personas que en este acto constituyen la Asociación y aquellas personas que cumplan con los requisitos de ingreso señalados en estos Estatutos.

ARTICULO 10

Será asociado quien reúna los siguientes requisitos:

- I.- Ser mexicano por nacimiento o naturalización, en pleno goce de sus derechos civiles y Políticos y tener dieciocho años o mas.
- II.- Haber presentado y suscrito cédula de afiliación de manera libre, individual y pacífica y cumplir con los documentos básicos, a saber, Principios, Programa de Acción y los Estatutos de la Asociación.

ARTICULO 11

La toma de decisiones de los asociados o sus representantes adoptará la regla de mayoría simple (cincuenta por ciento más uno de los asistentes) o especial según lo establecen los presentes estatutos, asimismo, las resoluciones tomadas en asambleas u órganos equivalentes serán válidos para todos los asociados, incluidos los disidentes o ausentes

ARTICULO 12

Son derechos de los asociados:

- I.- Gozar de voz y voto en las asambleas generales y convenciones, sea de manera directa o a través de delegados cuando así lo establezca la convocatoria respectiva.
- II.- Participar en los órganos de dirección y administración de la Asociación de acuerdo a los presentes estatutos.
- III.- Renunciar a la Asociación en cualquier tiempo mediante aviso por escrito.
- IV.- Disfrutar los beneficios que otorgue la Asociación.
- V.- Solicitar y recibir la información relacionada con el objeto de la Asociación ante los órganos correspondientes de la Asociación.
- VI.- Elegir y ser electos como candidatos a puestos de elección popular cuando se postulen mediante acuerdo de participación en elecciones constitucionales con algún Partido Político, en los términos de estos estatutos y los que establezcan las leyes electorales vigentes.

ARTICULO 13

Son obligaciones de los asociados:

- I.- Cumplir con las disposiciones que emanen del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de gobierno interno.
- II.- Cubrir las aportaciones a las que de manera voluntaria se haya comprometido.
- III.- No realizar acciones contrarias a los principios e intereses de la Asociación.
- VI.- Guardar orden, respeto y tolerancia hacia los demás compañeros en los procesos de desahogo de la orden del día de las asambleas.

DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION**ARTICULO 14**

Para el logro de sus objetivos La Asociación se estructura de la siguiente manera.

En el ámbito nacional

- I.- La Asamblea Nacional.
- II.- El Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez está integrado por los siguientes funcionarios:
 - a) Un presidente
 - b) Un secretario de finanzas
 - c) Un secretario de investigación

- d) Un secretario de capacitación política
 - e) Un secretario de tarea editorial
- III.- Las Comisiones Nacionales Permanentes de Honor y Justicia y la de Asuntos Electorales.

En el ámbito estatal:

- I.- Un Comité Ejecutivo Estatal, que a su vez estará integrado por los siguientes funcionarios:
- a) Un presidente
 - d) Un secretario de finanzas
 - e) Un secretario de investigación
 - f) Un secretario de capacitación política
 - g) Un secretario de tarea editorial

ARTICULO 15

La Asamblea Nacional es el órgano supremo de Parlamento Ciudadano Nacional, sus decisiones son obligatorias para todos sus miembros y estará formada por los siguientes integrantes o sus suplentes legales:

- I.- El Comité Ejecutivo Nacional
- III.- Los Presidentes de las Comisiones Nacionales Permanentes
- IV.- Los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito federal
- V.- Un delegado por cada 500 afiliados

ARTICULO 16

Los delegados a la asamblea nacional serán electos mediante convocatoria ex profeso expedida indistintamente por uno o todos los representantes legales de Parlamento Ciudadano Nacional firmando la convocatoria respectiva la mitad mas uno de los integrantes del comité ejecutivo nacional; o bien podrán ser electos mediante convocatoria ex profeso expedida por la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos.

ARTICULO 17

Corresponde en forma única a la Asamblea Nacional la modificación o derogación de la Declaración de Principios, Programa de Acción y de los Estatutos, salvo lo indicado en los artículos transitorios de los presentes estatutos. Podrá decidir sobre la conveniencia de la disolución de la sociedad. Los acuerdos que se tomen en la Asamblea Nacional se considerarán válidos con el voto, al menos, del 50 % más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional nombrará una mesa directiva integrada por un Presidente un Secretario y un vocal para el desahogo de la orden del día.

ARTICULO 18

La Asamblea Nacional, se reunirá en forma ordinaria cada tres años. La que tenga el carácter de extraordinaria podrá ser convocada indistintamente por uno o todos los representantes legales de Parlamento Ciudadano Nacional firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del comité ejecutivo nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos. La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.

ARTICULO 19

La asamblea nacional decidirá la renovación, reelección o revocación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mismo que elegirá a los restantes integrantes del comité ejecutivo nacional

ARTICULO 20

Cuando en la Asamblea Nacional la votación esté empatada el Presidente de la misma tendrá voto de calidad.

ARTICULO 21

La convocatoria a la asamblea nacional ordinaria podrá ser realizada indistintamente por uno o todos los representantes legales de Parlamento Ciudadano Nacional firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del comité ejecutivo nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos.

La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.

ARTICULO 22

Las Comisiones Nacionales Permanentes son:

I.- De Honor y Justicia.

II.- De Asuntos Electorales.

ARTICULO 23

Los Presidentes de las comisiones Nacionales Permanentes serán designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o por alguno de los representantes legales. Los Presidentes de las Comisiones Nacionales de Honor y Justicia y de Asuntos Electorales tendrán la responsabilidad de conducir sus acciones de manera transparente, independiente, profesional e imparcial.

Las Comisiones Nacionales estarán integradas por tres miembros, los cuales serán un Presidente, un Secretario y un Vocal. Los Presidentes de las Comisiones Nacionales designarán al Secretario y al vocal quienes tendrán la responsabilidad de conducir sus acciones de manera transparente, independiente, profesional e imparcial

Las funciones de las Comisiones Nacionales serán establecidas en los Reglamentos que para cada una de ellas habrá de emitirse por parte de, al menos, la mayoría simple del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 24

La Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales tendrá las siguientes funciones

I.- Realizar el estudio de los perfiles curriculares de los aspirantes a candidatos de nuestra Asociación a puestos de elección popular en caso de convenio con algún Partido Político Nacional.

II.- La Comisión fijará una postulación democrática para seleccionar al o los candidatos a puestos de elección popular, dado el caso.

III.- Conjuntamente con el presidente nacional firmará los convenios con el partido en cuestión.

ARTICULO 25

Las resoluciones de la Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales se harán con aprobación de mayoría de votos de sus integrantes.

ARTICULO 26

Ningún dirigente estatal o nacional de la Asociación podrá ocupar de manera simultánea dos o más puestos directivos en los órganos nacionales y/o estatales en la misma Asociación.

ARTICULO 27

Corresponden al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes facultades:

I.- Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus reuniones y ejecutar sus acuerdos.

III.- Presidir las reuniones con los demás integrantes de los comités ejecutivos estatales y del Distrito Federal.

IV.- Celebrar acuerdos y convenios con las direcciones de organizaciones y agrupaciones ideológicamente afines.

VIII.- Representar jurídica y legalmente a la Asociación y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554 del código civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República.

ARTICULO 28

El comité ejecutivo nacional durará seis años, lo mismo que los comités ejecutivos estatales y las comisiones nacionales permanentes.

ARTICULO 29

Son atribuciones del Secretario de capacitación política del Comité Ejecutivo Nacional:

I.- Diseñar, operar y mantener actualizados los programas nacionales de afiliación, así como el Registro Nacional de Afiliación, en coordinación con sus homólogos en todo el país.

- II.- Establecer programas nacionales, estatales y municipales de capacitación política, cívica, histórica y electoral para los asociados y público en general.
- III.- Dictar y coordinar cursos, pláticas, conferencias, etc., relacionadas con el objeto social de la Asociación.
- IV.- Convocar a reuniones del comité ejecutivo nacional y ejecutar sus acuerdos.

ARTICULO 30

Son facultades del Secretario de Investigación del Comité Ejecutivo Nacional:

- I.- Elaborar y coordinar los trabajos de Investigación económica, política y social.
- II.- Participar en eventos de la política, la sociedad y la economía para orientar las investigaciones en función de las necesidades nacionales.

ARTICULO 31

Son funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:

- I. Recabar de los asociados las aportaciones ordinarias y extraordinarias y otorgar los recibos correspondientes.
- II.- Llevar los registros de las cuentas corrientes que maneje la Asociación y preparar los presupuestos de ingresos y egresos.
- III.- Administrar el patrimonio y ejercer y aplicar los recursos financieros de la Asociación, así como administrar al personal que labore para la Asociación.
- IV.- Ser el Órgano responsable de la Administración del Patrimonio y recursos financieros de la Asociación, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos según lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para las Agrupaciones Políticas Nacionales o según el ordenamiento legal que lo sustituya.
- V.- Representar jurídica y legalmente a la Asociación y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554 del código civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República.

ARTICULO 32

El órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros de la Asociación rendirá al menos un informe anual respecto del estado de las finanzas de la Agrupación ante el Comité Ejecutivo Nacional, también hará lo mismo ante la asamblea nacional y en general proporcionará información financiera ante cualquier asociado que lo solicite o ante la entidad correspondiente del Instituto Federal Electoral.

ARTICULO 33

Son funciones de la Secretaría de tarea editorial del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:

- I.- Diseñar y coordinar el trabajo editorial de la Asociación de acuerdo a lo establecido como tarea editorial en la normatividad aplicable a la Asociación.
- II.- Coordinar la edición de los distintos medios de divulgación impresos de la Asociación.

ARTICULO 34

Las funciones que se establecen para las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, serán las mismas, en lo general, que desempeñarán las Secretarías de los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal, circunscribiéndose al ámbito de sus respectivas jurisdicciones y que no contravengan las funciones del Comité Ejecutivo Nacional. En caso de existir duda sobre el ejercicio de una función, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal presentará por escrito una consulta ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aclaración.

ARTICULO 35

En la primera elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal se observará el procedimiento siguiente: el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o cualquier representante legal convocará a asamblea de asociados a la elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal mediante sufragio universal, secreto y directo quienes cumplirán con el quórum descrito en este mismo artículo, en primera convocatoria y la segunda convocatoria se dará por emitida en el mismo acto y llevada a cabo con la presencia de los asistentes si no se cumple el quórum requerido, dándose por válida si a los acuerdos a que lleguen los asistentes se producen por unanimidad.

Para la elección de los posteriores Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal se observará el procedimiento siguiente: serán elegidos en asamblea de asociados mediante sufragio universal, secreto y directo a convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en primera convocatoria y con los asistentes en segunda convocatoria la que se realizará con al menos ocho días de diferencia en relación a la anterior.

La duración de sus funciones en ambos casos es por seis años.

Las asambleas estatales o del Distrito Federal tendrán Quórum con la mitad más uno de sus integrantes, de acuerdo al padrón de la Secretaría de capacitación política del Comité Ejecutivo Nacional en primera convocatoria, o con los asistentes, en segunda convocatoria de acuerdo a los procedimientos descritos en este mismo artículo.

ARTICULO 36

Los miembros de los Comités Ejecutivos Estatales podrán ser revocados de sus puestos en asamblea de asociados, mediante el sufragio universal, secreto y directo por la mitad más uno de sus asistentes. Se considera convocada la asamblea de asociados antes referida con escrito al propósito dirigido al Comité Ejecutivo Nacional con la firma de al menos el 25 % de los asociados de la correspondiente entidad federativa, según el registro nacional de afiliados.

ARTICULO 37

Los demás miembros de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal serán designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal o del Distrito Federal

DE LAS SANCIONES

ARTICULO 38

La Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia tendrá las siguientes atribuciones

- I.- Proteger la vigencia de los derechos de los afiliados
- II.- Fijar las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones de los afiliados.
- III.- Aplicar las sanciones, amonestaciones y suspensiones a los infractores de los presentes estatutos, la declaración de principios, el programa de acción o lo establecido por los órganos de Dirección.
- IV.- Otorgar estímulos a los asociados distinguidos.

ARTICULO 39

Las resoluciones de la Comisión Nacional Permanente de honor y justicia se harán con la aprobación de la mayoría de votos de sus integrantes.

ARTICULO 40

El carácter de miembro de la Asociación se pierde por las siguientes causales:

- I.- Por separación voluntaria del afiliado, previo aviso por escrito.
- II.- Por la expulsión acordada por la Comisión de Honor y Justicia cuando el expulsado haya realizado violación reiterada de nuestros principios o haya actuado en forma grave en contra de los intereses de nuestra Asociación.

La asociación dispondrá también de las siguientes medidas disciplinarias válidas para todos sus afiliados.

- III.- Amonestación verbal o por escrito por aquellas infracciones que se consideren leves y que no causen daños a la Asociación.
- IV.- En caso de reincidencia, el infractor podrá hacerse acreedor a una suspensión en sus derechos equivalente aun período que puede ir de un mes a un año.

ARTICULO 41

Es función del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal, convocar a la Comisión de Honor y Justicia, para establecer las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento respectivo. Los fallos que determine la Comisión de Honor y Justicia serán inapelables.

ARTICULO 42

Ningún afiliado a la Asociación podrá ser suspendido ni expulsado sin que el órgano competente haga de su conocimiento por escrito los cargos que existan en su contra, el nombre de su acusador y los medios de defensa que tiene a su alcance.

ARTICULO 43

Todo afiliado a la Asociación tendrá el derecho de ser escuchado en su defensa por sí o por persona de su confianza, y la oportunidad de presentar las pruebas y alegatos que considere convenientes en las instancias correspondientes, también tendrá el derecho de audiencia y defensa empleando los recursos legales que considere pertinentes en el proceso de aplicación de sanciones por faltas cometidas según lo establecen los presentes estatutos.

DE LA DISOLUCION

ARTICULO 44

Declarada la disolución por la Asamblea Nacional, la misma nombrará tres liquidadores quienes la liquidarán de acuerdo a lo que establece la ley.

ARTICULO 45

Posterior a la disolución de la Asociación, su capital contable será donado a una Asociación con finalidad similar a ésta o a institución o Asociación que acuerde la propia Asamblea Nacional.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNO

Se faculta por única vez al Comité Ejecutivo Nacional a realizar las modificaciones a los documentos básicos, principios, programas y estatutos y solventar las observaciones que solicite el Instituto Federal Electoral a través de sus funcionarios con motivo de la presentación de la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Nacional.

DOS

De ser necesario y para efectos de facilitar aperturas de cuentas bancarias o por algún motivo que lo amerite se faculta a cualesquier representante y apoderado legal de la Asociación que cambie el nombre de la Asociación para efectos de registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevo nombre que será notificado a quien corresponda en el Instituto Federal Electoral para fines de cambio de nombre de parlamento ciudadano nacional como agrupación política nacional (en su caso) a otro nombre distinto (como agrupación política nacional, en su caso).

TRES

Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional electo en acto constitutivo (según acta constitutiva) serán los primeros de su género y durarán seis años.